

Santiago, cinco de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que en este procedimiento ordinario de acción reivindicatoria tramitado ante el Primer Juzgado de Letras de Arica, bajo el Rol C-2633-2023, caratulado “SERVIU Región Arica y Parinacota con Mena”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casación en el fondo deducido por la demandada contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica de tres de diciembre de dos mil veinticuatro que confirmó el fallo de primer grado de treinta de julio de dos mil veinticuatro, que acogió la demanda.

Segundo: Que el recurrente sostiene en su arbitrio de nulidad que la sentencia ha infringido el artículo 61 del Decreto Supremo N° 49 de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, norma que debía ser aplicada ante el incumplimiento y conforme a la cual debía demandarse la restitución del monto del subsidio recibido, siendo improcedente la acción reivindicatoria deducida.

Finaliza solicitando se anule la sentencia y se declare la improcedencia de la acción reivindicatoria, en razón de lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Supremo 49 de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con expresa condena en costas del recurso.

Tercero: Que el artículo 772 del Código de Enjuiciamiento Civil, en armonía con lo previsto en los artículos 764 y 767 del citado cuerpo legal, permite, como sustento de la invalidación de la sentencia impugnada, el quebrantamiento de una o más normas legales contenidas en la decisión. Por ello, es menester que al interponer un recurso con tal objeto su promotora deba cumplir necesariamente con lo exigido por el precepto en análisis, esto es, expresar en qué consisten él o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida. En este orden de ideas, tanto la jurisprudencia judicial como la doctrina hacen consistir esos yerros en aquéllos que pudieron originarse por haber otorgado los sentenciadores un alcance diferente a una norma legal a la establecida por el legislador, ya sea ampliando o restringiendo el mandato de sus disposiciones; por haber aplicado una ley a un caso no previsto en ella, o, por último, por haber dado aplicación a un precepto legal en una situación ajena a la de su ámbito de aplicación.



Aparte del cumplimiento del requisito enunciado en el párrafo precedente, con idéntica rigurosidad el mismo artículo 772 aludido impone a quien interponga un recurso de casación en el fondo la obligación de señalar en el respectivo escrito, de manera circunstanciada, el modo en que él o los errores de derecho que denuncia han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia que trata de invalidar.

Cuarto: Que al enfrentar lo expuesto precedentemente con el recurso de casación en el fondo en estudio, se concluye indefectiblemente que carece de los requerimientos legales exigibles para su interposición, pues del examen del libelo se constata que el recurrente no explica la forma en que se habría verificado la infracción que reclama sino que se limita a señalar que se infringió el artículo 61 del Decreto Supremo N°49 de 2011, por falta de aplicación de la norma, puesto que ante el incumplimiento lo que procedía era demandar la restitución del subsidio recibido y no la acción reivindicatoria.

Atento a lo expresado, resulta inconcuso que el recurso que se analiza, en lo que dice relación con las normas que lo sustentan, carece de razonamientos concretos y precisos dirigidos a demostrar los errores de derecho en que habrían incurrido los sentenciadores, insuficiencia que impide a este tribunal resolver sobre la correcta aplicación de derecho.

Quinto: Que, por los motivos expuestos con antelación, el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante resulta inviable y no será acogido a tramitación.

Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 767 y 772 del Código de Procedimiento Civil, se declara **inadmisibile** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Juan Mena Goicochea en representación de la parte demandada contra la sentencia de tres de diciembre de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase, vía interconexión.

Rol N° 61.345-2024.





Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., María Angélica Cecilia Repetto G., María Soledad Melo L. y Ministro Suplente Hernán Alejandro Crisosto G. Santiago, cinco de febrero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a cinco de febrero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

